



SALA UNIPERSONAL DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	Ejecutivo singular
DEMANDANTES	Mónica María Farley Cardona y otra
DEMANDADOS	Elvia María viuda de Cardona y otros
RADICADO	05308 31 03 001 1997 05873 02
DECISIÓN	Declara inadmisible recurso de apelación

Medellín, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés

ANTECEDENTES

1.1. En providencia de 26 de abril de 2023, el Juzgado 001 Civil del Circuito de Girardota negó la solicitud de suspensión por prejudicialidad instaurada por Héctor Efrey Zapata Cardona, Ramón Emilio Múnera Paniagua, Norberto de Jesús Muñoz Marín, Ángela Lucía Aristizábal Marín, Ángela María David Urrego e Iván Antonio Cano Caro. Como fundamento de la decisión, tuvo en consideración que en relación con Héctor Efrey Zapata Cardona, Ramón Emilio Múnera Paniagua y Norberto de Jesús Muñoz Marín, de manera previa se había resuelto un incidente de nulidad y una oposición a la entrega, por lo que la solicitud de suspensión respecto de estos era improcedente por infundada, lo que daba lugar al rechazo de plano, habida cuenta de que, todas las decisiones adoptadas en el proceso habían alcanzado ejecutoria y lo único que faltaba era materializar la orden de entrega de los inmuebles objeto de remate.

En lo atinente a Iván Antonio Cano Caro, Ángela Lucía Aristizábal Marín y Ángela María David Urrego la juez señaló que el apoderado judicial que presuntamente los representa carecía de poder especial para tal fin; adicionalmente, los remitió al auto de 1 de octubre de 2019 que negó la oposición a la entrega, providencia que fue confirmada por este despacho en auto de 6 de mayo de 2020, en el cual se indicó que la oposición era improcedente, en tanto, en el presente caso la medida de embargo sobre los bienes identificados con matrículas inmobiliarias No. 012-19916 y 012-31758 fue inscrita desde 1997, y el secuestro fue practicado el 13 de agosto de 2015,

sin que allí se presentara oposición alguna, así como tampoco al momento en que al expediente se agregó la actuación relacionada con la diligencia de secuestro el 19 de octubre de 2015.

Por lo tanto, definió que los memorialistas no podían pretender la suspensión de la diligencia de entrega de los bienes ordenada con antelación, y menos bajo el argumento de la existencia de un proceso de pertenencia que fue instaurado con posterioridad a todo el debate jurídico procesal de este procedimiento, pues era evidente que no se podía predicar la existencia de prejudicialidad bajo esos supuestos fácticos y jurídicos, por cuanto, los hechos que se invocan como sustento de la solicitud de prejudicialidad, son elementos fácticos planteados en la solicitud, pues no se tuvo en cuenta que los bienes adjudicados en remate tenían un mayor valor, por lo que la adjudicataria se estaría enriqueciendo sin justa causa. Expuso que el despacho no analizó el *quid* del asunto, pues se conocía que, sobre los lotes de terreno adjudicados, existía una comunidad, ya que a la rematante solo se le adjudicó el 50% en común y proindiviso, por lo que a esta corresponde tramitar el proceso divisorio, con el fin de que se le entregue lo que en derecho le corresponde y no ordenar la entrega del 100% de los inmuebles. Anotó que los impugnantes pretenden defender sus derechos fundamentales, pues son poseedores de los inmuebles que se ordenó entregar y en los cuales hay mejoras. Apuntó que la rematante ni siquiera sabe dónde está el derecho que remató, pues en ninguna parte se dijo que se le adjudicó el 100% de las matrículas inmobiliarias reseñadas, solo se le adjudicó el 50% y en la orden de entrega no se especifica cuál es la parte de los lotes de terreno sobre la que tiene derechos proindiviso.

Finalmente, precisó que lo solicitado es la suspensión de la diligencia de entrega, mientras no haya un proceso de división material para saber en cual parte del inmueble está el derecho de la ejecutante, adquirente en el remate.

1.3. Surtido el traslado respectivo, Mónica María Farley Cardona (ejecutante) se pronunció y solicitó que la providencia recurrida se mantuviera; que la diligencia de entrega no se suspendiera; y tampoco se ordenara tramitar el proceso divisorio. Como cimienta, refirió que se hizo propietaria del 50% de los inmuebles objeto de remate, que no conoce a ninguno de los recurrentes

como poseedores de buena fe de los bienes o porcentajes en dichos inmuebles que les fueron adjudicados. Dijo que a folio 412 reposa informe de la secuestre en que se indicó que había presuntos poseedores que se negaron a entregar e inclusive uno de los inmuebles tenía letrero de venta en aquel momento con matrícula inmobiliaria No. 012-31758, y hoy en virtud de la petición efectuada por el apoderado de Elvia Gaviria viuda de Cardona, la oficina de registro les asignó las matrículas 012-84320 y 012-84321.

Señaló que a folio 413 obra oposición a la entrega, fundamentada en un contrato de compraventa no suscrito por Elvia Gaviria viuda de Cardona, y en el que se consignó que el comprador asumiría el rol de inquilino. Dicha solicitud fue resuelta el 1 de octubre de 2019 de manera desfavorable y fue confirmada en auto de 6 de mayo de 2020. Adicionalmente, interpusieron solicitud de nulidad frente a la diligencia de secuestro o en su defecto frente a la diligencia de remate, así como acción de tutela, sin embargo, ninguna de las dos salió adelante. Esto permite inferir que lo pretendido es en un desgaste a la administración de justicia. Por último, advirtió que tiene la facultad de decidir sobre tramitar o no el proceso divisorio, pues eso no es un derecho de los presuntos poseedores ni del despacho.

1.4. El Juzgado 001 Civil del Circuito de Girardota en auto de 21 de junio de 2023 resolvió el recurso de reposición de manera desfavorable, por lo cual mantuvo incólume lo resuelto y concedió la alzada.

Los fundamentos de la decisión se centraron en que el 10 de febrero de 2023 el apoderado de los terceros intervinientes había solicitado la suspensión de la diligencia de entrega, de los bienes inmuebles de este proceso, petición que se resolvió de forma negativa, porque frente a Héctor Efrey Zapata Cardona, Ramón Emilio Múnera Paniagua y Norberto de Jesús Muñoz Marín, dicha solicitud, además de ser improcedente por infundada, daba lugar al rechazo de plano, pues todas las decisiones adoptadas en el proceso, habían quedado en firme y solo faltaba materializar la orden de entrega de los inmuebles.

En relación con Iván Antonio Cano Caro, Ángela Lucía Aristizábal Marín y Ángela María David Urrego, el despacho se remitió a la decisión adoptada el 1 de octubre de 2019, que negó la oposición a la diligencia de entrega, confirmada

por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín en auto de 6 de mayo de 2020. Por lo tanto, el juzgado concluyó que la suspensión de la diligencia de entrega de los bienes ordenada con antelación no procedía, y menos aún con el argumento de que se está tramitando unos procesos de pertenencia que además fueron instaurados con posterioridad a todo el debate jurídico procesal que ocupó esa ejecución. Anotó que los presupuestos para que operara la suspensión por prejudicialidad no se daban, puesto que los supuestos fácticos invocados son posteriores a la ejecutoria de la decisión que ordenó la entrega. Por eso, en auto de 26 de abril de 2023 el despacho negó la suspensión frente a Iván Antonio Cano Caro, Ángela Lucía Aristizábal Marín y Ángela María David Urrego.

Ahora, el apoderado judicial de los mencionados presentó recurso de reposición y en subsidio apelación bajo el argumento de que el despacho no se pronunció sobre los elementos fácticos expuestos en la solicitud de suspensión, consistentes en que la ejecutante Mónica María Farley Cardona había adquirido por remate unos derechos en proindiviso sobre los bienes inmuebles 012-84320, 012-84321 y 012-19916, por lo que se sabía cuál era la parte que realmente le iba a corresponder sobre dichos bienes, y que mal haría una autoridad competente en hacer la entrega material sobre unos derechos en común y proindiviso, pese a existir la obligación previa de adelantar un proceso divisorio. Lo anterior aunado a que, los bienes inmuebles en mención fueron valuados en más de \$1 315 000 000 y la rematante adquirió el 50% en \$200 000 000, lo que generaría un enriquecimiento sin causa.

En este sentido, definió que al revisar lo actuado en el proceso, se observó que el 29 de abril de 2019, fue rematado y adjudicado el 50% del derecho de dominio que Elvia Gaviria viuda de Cardona ostenta sobre los inmuebles con matrículas inmobiliarias No. 012-19916 y 012-31758, por Mónica Farley Cardona. Dicha diligencia fue aprobada en auto de 27 de junio de 2019, acto en el que se ordenó a la secuestre hacer entrega del 50% de los mencionados predios a la rematante. De acuerdo con ello, la entrega real y material, a la adjudicataria, así como del otro 50% de los mismos a Lucero Giraldo, por haber adquirido por adjudicación en sucesión, es la forma en que se materializa lo ordenado en providencia de 16 de febrero de 2022. En lo que a la división material de los bienes se refiere para adjudicarse a cada una de las

propietarias, es facultativo de las titulares, dividir o seguir en indivisión, de modo que no repuso la decisión censurada. Finalmente, concedió el recurso de apelación, de acuerdo con lo previsto en el numeral 9 del artículo 321 del C.G.P.

1.5. El apoderado judicial de María Claudina García (opositora) interpuso apelación adhesiva y como fundamento del recurso trajo a colación la demanda de pertenencia incoada frente a Lucero Giraldo Arismendy, Mónica María Farley Cardona y personas indeterminadas.

CONSIDERACIONES

2.1. El artículo 321 del Código General del Proceso establece la procedencia del recurso de apelación y cuáles son las decisiones susceptibles de ser impugnadas por este medio. Al respecto, la norma en cita señala:

"ARTÍCULO 321. PROCEDENCIA. Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad.

También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:

- 1. El que rechace la demanda, su reforma o la contestación a cualquiera de ellas.*
- 2. El que niegue la intervención de sucesores procesales o de terceros.*
- 3. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.*
- 4. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo.*
- 5. El que rechace de plano un incidente y el que lo resuelva.*
- 6. El que niegue el trámite de una nulidad procesal y el que la resuelva.*

7. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.

8. El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla.

9. El que resuelva sobre la oposición a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano.

10. Los demás expresamente señalados en este código.”

2.2. A su vez, los artículos 161 y 162 ibídem prevén la figura de la suspensión por prejudicialidad y sus efectos.

"ARTÍCULO 161. SUSPENSIÓN DEL PROCESO. El juez, a solicitud de parte, formulada antes de la sentencia, decretará la suspensión del proceso en los siguientes casos:

1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención. El proceso ejecutivo no se suspenderá porque exista un proceso declarativo iniciado antes o después de aquel, que verse sobre la validez o la autenticidad del título ejecutivo, si en este es procedente alegar los mismos hechos como excepción.

2. Cuando las partes la pidan de común acuerdo, por tiempo determinado. La presentación verbal o escrita de la solicitud suspende inmediatamente el proceso, salvo que las partes hayan convenido otra cosa.

PARÁGRAFO. Si la suspensión recae solamente sobre uno de los procesos acumulados, aquel será excluido de la acumulación para continuar el trámite de los demás.

También se suspenderá el trámite principal del proceso en los demás casos previstos en este código o en disposiciones especiales, sin necesidad de decreto del juez.

ARTÍCULO 162. DECRETO DE LA SUSPENSIÓN Y SUS EFECTOS. Corresponderá al juez que conoce del proceso resolver sobre la procedencia de la suspensión.

La suspensión a que se refiere el numeral 1 del artículo precedente solo se decretará mediante la prueba de la existencia del proceso que la determina y una vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia de segunda o de única instancia.

La suspensión del proceso producirá los mismos efectos de la interrupción a partir de la ejecutoria del auto que la decreta.

El curso de los incidentes no se afectará si la suspensión recae únicamente sobre el trámite principal.”

CASO EN CONCRETO

En el caso bajo examen, el despacho observa que la decisión recurrida vía apelación por parte de los terceros opositores, no es de las que se enmarca en el artículo 321 del Código General del Proceso y demás normas concordantes, en tanto, si bien la falladora de primer nivel estimó que el recurso procedía con fundamento en el numeral 9 del artículo en cita, lo cierto es que, en el auto impugnado en ningún momento se resolvió sobre la oposición a la entrega de bienes o se rechazó de plano, pues lo resuelto en proveído de 26 de abril de 2023 fue la solicitud de suspensión del trámite por prejudicialidad cimentada en la existencia de procesos de pertenencia en los cuales se discutirá sobre la presunta posesión ejercida por los aquí opositores, y no, la oposición a la entrega, como la juzgadora de instancia, consideró, pues esta había sido resuelta de manera desfavorable desde el 1 de octubre de 2019 por el Juzgado 001 Civil del Circuito de Girardota, y fue confirmada por este despacho en providencia de 6 de mayo de 2020.

A esta judicatura corresponde, por lo tanto, declarar inadmisibile el recurso de apelación incoado, por improcedencia del mismo al no estar incluido entre los enlistados en el artículo 321 del Código General del Proceso, ni en las demás

normas concordantes. Así mismo, se debe indicar que, en relación con la apelación adhesiva interpuesta por María Claudina García, la misma no podrá ser estudiada, pues al ser declarada la improcedencia del recurso de alzada, la inconformidad adhesiva corre la suerte de la principal.

De otro lado, en virtud de la solicitud allegada por el apoderado judicial de los opositores el 15 de agosto de 2023 mediante la cual, requiere la suspensión del trámite, conforme con las consideraciones expuestas, no hay lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues este despacho carece de competencia para resolver sobre dicha petición, resuelta ya por el juez competente.

De acuerdo con lo anterior, este despacho RESUELVE:

DECLARAR inadmisibile el recurso de apelación incoado y ORDENAR la devolución de las diligencias al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE



MARTHA CECILIA LEMA VILLADA
Magistrada